Contenido

[ANTECEDENTES 1](#_Toc178770823)

[DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1](#_Toc178770824)

[a) Solicitud de información 1](#_Toc178770825)

[b) Turno de la solicitud de información 2](#_Toc178770826)

[c) Respuesta del Sujeto Obligado 2](#_Toc178770827)

[DEL RECURSO DE REVISIÓN 4](#_Toc178770828)

[a) Interposición del Recurso de Revisión 4](#_Toc178770829)

[b) Turno del Recurso de Revisión 4](#_Toc178770830)

[c) Admisión del Recurso de Revisión 5](#_Toc178770831)

[d) Informe Justificado del Sujeto Obligado 5](#_Toc178770832)

[e) Manifestaciones de la Parte Recurrente 5](#_Toc178770833)

[f) Ampliación de plazo para resolver el Recurso de Revisión 6](#_Toc178770834)

[g) Requerimiento de información adicional. 9](#_Toc178770835)

[h) Cierre de instrucción 14](#_Toc178770836)

[CONSIDERANDOS 14](#_Toc178770837)

[PRIMERO. Procedibilidad 14](#_Toc178770838)

[a) Competencia del Instituto 14](#_Toc178770839)

[b) Legitimidad de la parte recurrente 15](#_Toc178770840)

[c) Plazo para interponer el recurso 15](#_Toc178770841)

[d) Interés legítimo 15](#_Toc178770842)

[e) Requisitos formales para la interposición del recurso 16](#_Toc178770843)

[SEGUNDO. Estudio de Fondo 16](#_Toc178770844)

[a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado 16](#_Toc178770845)

[b) Controversia a resolver 18](#_Toc178770846)

[c) Estudio de la controversia 20](#_Toc178770847)

[d) Versión pública 44](#_Toc178770848)

[f) Conclusión 52](#_Toc178770849)

[RESUELVE 52](#_Toc178770850)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, **del tres de octubre de dos mil veinticuatro.**

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión **04197/INFOEM/IP/RR/2023** interpuesto por **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX**, a quien en lo subsecuente se le denominará **LA PARTE RECURRENTE**, en contra de la respuesta emitida por el Ayuntamiento **de Temascalcingo**, en adelante **EL SUJETO OBLIGADO**, se emite la presente Resolución con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# ANTECEDENTES

## DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### a) Solicitud de información

El **veintidós de junio de dos mil veintitrés**, **LA PARTE RECURRENTE** presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el **SUJETO OBLIGADO**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). Dicha solicitud quedó registrada con el número de folio **00066/TMASCALC/IP/2023** y en ella se requirió la siguiente información:

*“Solicita el número total y copia del documento en el que se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de temascalcingo de los años 2018 al 2023 Solicito conocer el número total y copia del documento en el que se lleva el registro de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2028 al 2023 Solicito conocer el número de sanciones administrativas emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del añ0 2018 al 20223, en que han consistido y a quienes han sancionado. Solicito conocer el número de resoluciones que absolvieron o dejaron de imponer sanción a personas con motivo de procedimientos de investigación o responsabilidad administrativa emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del añ0 2018 al 20223 En caso de que se niegue a entregar la información solicitada, presentare solicitud e entrega de la versión publica de cada uno de los expedientes con estatus o carácter de concluidos de los procedimientos de investigación y de los procedimientos de responsabilidad administrativa de os años del 2018 a junio de 2023.” Sic*

**Modalidad de entrega**: a *través del SAIMEX.*

### b) Turno de la solicitud de información

En cumplimiento al artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **veintisiete de junio de dos mil veintitrés**, el Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** turnó la solicitud de información al servidor público habilitado que estimó pertinente —Titular de la Contraloría Municipal—.

### c) Respuesta del Sujeto Obligado

El **doce de julio de dos mil veintitrés**, el Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** notificó a través del SAIMEX:

*Temascalcingo, México a 12 de Julio de 2023*

*Nombre del solicitante: C. Solicitante*

*Folio de la solicitud: 00066/TMASCALC/IP/2023*

*En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*POR MEDIO DEL PRESENTE SE ENVIA INFORMACIÒN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD 00066/TMASCALC/IP/2023.*

Anexando los archivos siguientes:

* ***00066TMASCALCIP2023.pdf***: Archivo constante de 5 páginas, relativo al oficio MTM/CM/341/06/2023 de treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, la Contralora Municipal informa, entre otras situaciones a la Titular de la Unidad de Transparencia el número de procedimientos de investigación, de responsabilidad administrativa y de resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa de 2022 y 2023; así como de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 conforme al acta de conclusión de gestión municipal de la Contraloría. Además, refiere que respecto de la copia del documento en donde se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa y de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría de los años 2018 al 2023, tiene el carácter de información reservada, en términos del artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia local.

Motivo por el cual, solicita se someta a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de la información como reservada.

* ***00066TMASCALCIP2023 PRUEBA DE DAÑO.pdf***: Constante de 8 páginas, relativas al oficio MTM/CM/381/07/2023, a través del cual, la Contralora Municipal presenta y aplica una prueba de daño respecto de la información solicitada.
* ***00066TMASCALCIP2023 CUADRAGESIMA NOVENA SESIÒN DE COMITE DE TRANSPARENCIA .pdf***: Constante de 11 páginas, relativas al Acta de MTM/UT/49/07/2023, en la cual, dentro del orden del día podemos observar la presentación, análisis y en su caso, aprobación de la clasificación de la información como reservada presentada por el servidor público habilitado por la Contraloría Municipal de Temascalcingo, para dar respuesta a la solicitud 00066/TMASCALC/IP/2023.

## DEL RECURSO DE REVISIÓN

### a) Interposición del Recurso de Revisión

El **treinta y uno** **de julio de dos mil veintitrés[[1]](#footnote-1)** **LA PARTE RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, mismo que fue registrado en el SAIMEX con el número de expediente **04197/INFOEM/IP/RR/2023**, y en el cual manifiesta lo siguiente:

**ACTO IMPUGNADO**

*“La falta de entrega de la información. solicitada, asi como la dolosa clasificación de información como reservada, sin tener ese carácter con la finalidad de no entregar informacion,”*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“No se entrega la información que se solicita, ni se da respuesta a cada uno de los planteamientos de la solicitud de información, incurre en responsabilidad administrativa señalada en el articulo 222 fracción III de la Ley de Transparencia del estado. viola mi derecho humano a la informacion”.*

### b) Turno del Recurso de Revisión

Con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se turnó el recurso de revisión a través del SAIMEX a la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez**, a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

### c) Admisión del Recurso de Revisión

El **dos de agosto de dos mil veintitrés** se acordó la admisión a trámite del Recurso de Revisión y se integró el expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### d) Informe Justificado del Sujeto Obligado

**EL SUJETO OBLIGADO** no rindió su informe justificado dentro del término legalmente concedido para tal efecto.

### e) Manifestaciones de la Parte Recurrente

**LA PARTE RECURRENTE** remitió sus manifestaciones a través del SAIMEX el **diez de agosto de dos mil veintitrés**, en las cuales expresó lo siguiente:

En uso de mis derechos humanos consagrados en la Constitucion en particular en el articulo 1 y 6 , manifiesto mi inconformidad por la falta de entrega de la información que solicite al ayuntamiento de Temascalcingo, me causa agravio y lesionan mi derecho de acceso a la información al reservar información que debe ser publica, bajo el falso argumento de que al entregar el registro de los procedimientos que referi se violenta la privicidad y buen nombre de los servidores públicos denunciados, ya que como se sabe este dato es publico, por otro lado también violan la ley de transparencia al reservar información de manera dolosa y en forma total un documento, como se sabe la reserva de información es parcial y por un tiempo determinado que no puede ser mayor a 5 años, en este caso y como se aprecia no se menciona el nombre especifico del docuemnto que se reserva, sino la información cualitativa que contiene, no se aporta una prueba de daño real, ni se fundamenta y motiva en especifico sobre este particular la causa de la reserva, solo se constriñen a trancribir deiversos artículos, tampoco se ordena como debio ser generar la versión publica del documento reservado, es preciso señalar queesta solicitud no la atiende el servidor publico que conforme a la Ley General de Responsabilidaddes Administrativas es el responsable de la investigación, de la sustanciación y de la Resolucion de los procedimientos de responsabilidad administrativa, sino la Contralor Municipal dicho acto también constitye una violación a la ley, ya que quien debe estar en posesión de la información que solicite es quien lleva los procedimentos de investigación y de responsabilidad administrativa, actos que no son competencia de la titular de la contraloría municipal. Es menester manifestar que la falta de entrega de la infrmacion que solicito conlleva una flagrante violación también al principio de seguridad jurídica y debido proceso, principios que deben regir las actuaciones de las autoridades mencionadas, por que no existe certeza de que lleven los registros correspondientes, los cuales dan orden a la secuencia de inicio de los procedimientos, e indican en contra de quien se inciaron, asi como la probable responsabilidad, y siendo estos solo de conocimiento de quienes los generan, pueden propiciar su manipulación y malas practicas de quienes tienen la obligación de generar tales, registros. Ejemplificativamente dire que en los ministerios públicos y juzgados existen los libros de gobierno y/o índice los que muestran el numero de expediente, su fecha de registro, las partes, el probable hecho delictivo etc, y tales registros de consuta publica, probablemente la falta de conocimiento jurídico y practica del ejercicio de la abogacía ocaciona que quienes debieron dar la respuesta a lo que solicite y quienes clasificaron la información hallan incurrido en la violación a miderecho humano, no obstante, este instituto confio restituya mi derecho, y tome las medidas de apremio correspondientes por: 1. La Violacion a mi derecho Humano a la Informacion. 2. La indebida reserva de la información. 3. Que la autoridad competente sea la que de respuesta a la información que solicito.

### f) Ampliación de plazo para resolver el Recurso de Revisión

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, **el once de septiembre de dos mil veintitrés** se acordó ampliar por un periodo razonable el plazo para resolver el presente Recurso de Revisión; acuerdo que fue notificado a las partes a través del SAIMEX en esa misma fecha.

El plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Es importante precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable. En ese sentido, el legislador estableció los términos procesales de forma general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma, debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.

**Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “**TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO**.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el asunto resulta de carácter excepcional.

### g) Requerimiento de información adicional.

El **catorce de agosto de dos mil veinticuatro**, se requirió al **SUJETO OBLIGADO** para que se pronunciara respecto de:

1. ¿Qué datos contiene el documento en el que se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023?

2. ¿Qué datos contiene el documento en el que se lleva el registro de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023?

En atención a lo anterior, el dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** señaló: “*RESPUESTA AL RECUERSO DE REVISIÓN 4197/2023 CON RESPECTO A LA SOLICITUD 066/2023*” acompañando el archivo siguiente.

***RR 4197 SOLICITUD 00066 2023.pdf***: Consta de 15 páginas relativas a diversos oficios que se describen a continuación:

* Oficio MTM/CM/AS/13/09/2024, de **cinco de septiembre** de dos mil veinticuatro, mediante el cual, la autoridad substanciadora informa al titular de la Unidad de Transparencia que en atención al requerimiento MTM/UT/359/08/2024:
* Dio contestación en tiempo y forma mediante los oficios MTM/CM/341/06/2023y MTM/CM/381/07/2023.
* Que lo solicitado será materia de estudio y determinación de la resolución del Pleno del INFOEM.
* Oficio MTM/CM/AI/126/08/2024, de nueve de septiembre de dos mil veinticuatro a través del cual, la autoridad de investigadora informa al titular de la Unidad de Transparencia que en atención al requerimiento MTM/UT/359/08/2024:
* Remitió oportuna respuesta con el oficio MTM/CM/AI/391/06/2023.
* En relación con el número total de expedientes tramitados por esta Autoridad Investigadora, dentro de la etapa del proceso administrativo denominada como investigación, la misma fue atendida en los incisos b) y c) del oficio de respuesta MTM/CM/A1/391/06/2023 ( se anexa copia simple para mejor proveer) de fecha 27 de junio de 2023; incluso le fue precisado al solicitante que los expedientes que fueron aperturados por esta Autoridad durante el periodo de tiempo que se señaló en lo incisos de nuestra atención, y en términos del artículo 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, les era asignado un número de expediente de forma progresiva y de forma anual.
* La precisión con la que el solicitante pretende se le otorgue la información que solicita, implica el otorgamiento o ventilación de datos confidenciales y personales de aquellos servidores públicos o ex servidores públicos que se encuentren vinculados con los procedimientos de investigación bajo la responsabilidad y trámite de Autoridad Investigadora; mismos a que la fecha de la solicitud no cuenta con calificación de faltas administrativas consideradas por la ley de la materia como graves, situación que sería la Única excepción que la ley consagra a fin de priorizar por encima de la información personal y confidencial de los implicados.
* Que no precisa el tipo de documento en el que dicha información debe constar; por ello, se insiste que los datos estadísticos otorgados al solicitante y por cuanto hace a la actuación de esta Autoridad Administrativa, colma el derecho a la información pública del solicitante; dado que si bien es cierto, además de dichos datos, esta Autoridad Administrativa en efecto documenta su actuación, a través de la apertura de los expedientes de investigación que la ley obliga a iniciar por la existencia de hechos u omisiones por la probable comisión de faltas administrativas, expedientes que contienen información confidencial tal como se hiciera del conocimiento del solicitante, misma que como se refiere en párrafos anteriores, contrario a lo argumentado por el recurrente, su otorgamiento vulneraría derechos de los implicados en los mismos.
* Que una vez que dichos expedientes se encuentran debidamente integrados y acreditada la presunta responsabilidad administrativa, se procede a la elaboración de la calificación de falta administrativa y la elaboración de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, documentos con los cuales se da por concluido el procedimiento administrativo de investigación, mismos que son turnados físicamente para el trámite correspondiente a la Autoridad Substanciadora de esta Contraloría Interna, quien continua con el procedimiento administrativo en la etapa correspondiente.
* Que la autoridad investigadora dentro de la presente administración pública municipal, hecho que se concretó con la entrada en vigor de los Bandos Municipales de Temascalcingo, Estado de México 2022 y 2023, por lo que la información requerida, relativa a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, en específico la relacionada a los posibles procedimientos de investigación que se llevaran dentro de la Contraloría Municipal, la misma es información que no obra en poder de esta Autoridad Investigadora, desconociéndose si la misma exista o se encuentra bajo el resguardo de la propia Contraloría Municipal, (por lo que considera que no se trata de una inexistencia).
* Oficio MTM/CM/342/06/2023, del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, la Contralora Municipal remitió la solicitud de información a la autoridad investigadora a efecto de que se pronunciare respecto de lo solicitado.
* Oficio MTM/CM/AI/391/06/2023, del veintisiete de junio de dos mil veintitrés mediante el cual, la autoridad investigadora informa a la Contralora Municipal su respuesta respecto del diverso MTM/CM/342/06/2023, en donde informa respecto de la relación con el número total y copia del documento donde se lleva por parte de esta Autoridad Investigadora el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa tramitados en los años 2018 al 2023; en donde refiere:
* Que los expedientes de investigación que son aperturados por presuntas faltas administrativas se generar un número de expediente; el cual se integra de la nomenclatura MTM (Municipio de Temascalcingo) CM (Contraloría Municipal) Al (Autoridad Investigadora) y finalmente número progresivo y año en el que se inicia la investigación.
* La Autoridad Investigadora que da repuesta está en funciones a partir del 01 de marzo de 2022 y durante el año 2022 se iniciaron un total de 200 expedientes de investigación, en 2023 a la fecha (27 de junio de 2023) se han iniciado 245 expedientes de investigación. De los años 2018, 2019, 2020 y 2021, no se cuenta con la información requerida, toda vez que dentro de la Administración 2022-2024, no ha sido recibida por el área que represento documentación o información alguna con respecto a los asuntos que peticiona, dado que únicamente fue generada la Entrega —Recepción con cargo al ex Contralor Municipal, quien en su caso hizo la entrega de todos los asuntos competencia del Órgano de Control Interno.
* Todos los expedientes de investigación cuentan con información reservada, hasta en tanto los mismos no hayan sido concluidos, asimismo, contiene datos personales, considerados como información confidencial. En consecuencia quienes intervengan en el procesamiento y trámite de dicha información están obligados a guardar el secreto y sigilo correspondiente, aún después de cesar en el cargo como servidor público.
* Impresión de Índice del Servidor Público Habilitado del SAIMEX del 9 de septiembre de 2024 en donde se visualiza que no tiene requerimientos de información por atender.
* Oficio MTM/CM/AR/040/09/2024, del 4 de septiembre de 2024, mediante el cual, la Autoridad Resolutora informa a la Titular de la Unidad de Transparencia que la solicitud descrita con antelación, no le fue turnada por la Unidad de Transparencia pero que la misma fue atendida mediante el oficio MTM/CM/381/07/2023 de fecha 11 de julio de 2023
* Oficio MTM/CM/674/09/2024, del 3 de septiembre de 2024, mediante el cual, la Contralora Municipal informa que respecto de lo solicitado por el recurrente, será materia de estudio y determinación de la Resolución que para tales efectos emita el Pleno de este Instituto.

### h) Cierre de instrucción

Al no existir diligencias pendientes por desahogar, el **dos de octubre de dos mil veinticuatro** la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción y la remisión del expediente a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el mismo día a través del SAIMEX.

# CONSIDERANDOS

## PRIMERO. Procedibilidad

### a) Competencia del Instituto

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; ordinal 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

### b) Legitimidad de la parte recurrente

El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que se presentó por la misma persona que formuló la solicitud de acceso a la Información Pública,debido a que los datos de accesoSAIMEX son personales e irrepetibles.

### c) Plazo para interponer el recurso

**EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de acceso a la Información Pública el miércoles **doce de julio de dos mil veintitrés** y el recurso que nos ocupa se interpuso el jueves **veinte de julio,** sin embargo al corresponder a un día inhábil se tiene por presentado el primer día hábil siguiente; por lo tanto, éste se encuentra dentro del margen temporal previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual transcurrió del **trece al dieciséis de agosto de dos mil veintitrés**, sin contemplar en el cómputo los días sábados, domingos y aquellos considerados como días inhábiles en términos del Calendario oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como de labores del Instituto.

### d) Interés legítimo

Resulta procedente la interposición del recurso de revisión, ya que se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracciones II y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### e) Requisitos formales para la interposición del recurso

**LA PARTE RECURRENTE** acreditó todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la misma normatividad.

## SEGUNDO. Estudio de Fondo

### a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.***

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

Asimismo, el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios indica que la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares.*

Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios refiere que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Esto es, que los Sujetos Obligados deben atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les sean realizadas, y proporcionar la información pública que obre en su poder, conforme al estado en que se encuentre, sin que sea necesario procesar la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma, teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular o practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretarán a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentra, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

En esa tesitura, el artículo 24 último párrafo de la Ley de la Materia dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial.

Con base en lo anterior, se considera que **EL** **SUJETO OBLIGADO** se encontraba compelido a atender la solicitud de acceso a la información realizada por **LA PARTE RECURRENTE**.

### b) Controversia a resolver

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada, resulta conveniente precisar que, una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que **LA PARTE RECURRENTE** solicitó lo siguiente:

1. Número total y copia del documento en el que se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018 al 2023.
2. Número total y copia del documento en el que se lleva el registro de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018 al 2023.
3. Número de sanciones administrativas emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023, en qué han consistido y a quiénes han sancionado.
4. Número de resoluciones que absolvieron o dejaron de imponer sanción a personas con motivo de procedimientos de investigación o responsabilidad administrativa emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023.

En respuesta, la Contraloría del **SUJETO OBLIGADO** se pronunció por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia, quien proporcionó el número de procedimientos de investigación, de responsabilidad administrativa y de resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa de 2018 al 2023. Además, refiere que, respecto de la copia del documento en donde se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa y de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría de los años 2018 al 2023 es información reservada, en términos del artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia local.

Ahora bien, en la interposición del presente recurso **LA PARTE RECURRENTE** se inconformó de “*No se entrega la información que se solicita, ni se da respuesta a cada uno de los planteamientos de la solicitud de información… viola mi derecho humano a la información*”, por lo cual, se suple la deficiencia de la queja de conformidad con los artículos 13[[2]](#footnote-2) y 181[[3]](#footnote-3) enmarcados en la Ley de Transparencia local, ya que dentro del acto impugnado se observa que forma parte de su inconformidad al señalar “*La falta de entrega de la información solicitada, así como la dolosa clasificación de información como reservada, sin tener ese carácter con la finalidad de no entregar información,*” por lo que el estudio se centrará en determinar si la información solicitada se entregó de forma completa y, la procedencia de la clasificación de la información como reservada a fin de determinar si se ha vulnerado el derecho de acceso a la información de **LA PARTE RECURRENTE.**

### c) Estudio de la controversia

Primeramente es importante referir que, de acuerdo con la **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,** todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Estatal o municipal y la actuación ética y responsable de sus servidores públicos (artículo 6).

Además, la **Ley Orgánica Municipal del Estado de México**, señala que el órgano interno de control municipal es el encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos (artículo 110).

En ese sentido y toda vez que el **SUJETO OBLIGADO** no se encuentra desconociendo la información que le ha sido solicitada, se considera que éste es competente para conocer de la misma.

Ahora bien, de conformidad con el Bando Municipal del **Ayuntamiento de Temascalcingo**, la Contraloría Municipal tiene a su cargo las funciones de órgano interno de control que señala el marco legal vigente, en las dependencias, entidades y organismos descentralizados de la administración pública municipal, por ello, al haberse pronunciado en respuesta la Contralora Municipal, se considera que se ha pronunciado el área competente.

Determinado lo anterior, contrastaremos la información solicitada y la entregada para efecto de determinar si con la respuesta se puede colmar lo solicitado.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lo solicitado** | **Lo entregado**  El oficio MTM/CM/341/2023, firmado por la Contralora Municipal en donde informa: | **Observación** |
| 1. Número total y **copia del** **documento en el que se lleva el registro** de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018 al 2023. | **Procedimientos de Investigación**  Ejercicio fiscal 2023: 245  Ejercicio fiscal 2022: 200  Ejercicio fiscal 2021: 0  Ejercicio fiscal 2020: 19  Ejercicio fiscal 2019: 76  Ejercicio fiscal 2018: 20  Del documento en el que se lleva el **registro:** refiere que se trata de información reservada (en términos del artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia local). | Solo hay respuesta respecto del número de procedimientos de investigación. Se tiene por colmado el dato cuantitativo.  El documento del registro ha sido reservado. |
| 1. Número total **y copia del documento en el que se lleva el registro** de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018 al 2023. | **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa**  Ejercicio fiscal 2023: 19  Ejercicio fiscal 2022: 13  Ejercicio fiscal 2021: 0  Ejercicio fiscal 2020: 0  Ejercicio fiscal 2019: 0  Ejercicio fiscal 2018: 2  Del documento en el que se lleva el **registro:** refiere que se trata de información reservada (en términos del artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia local). | Solo hay respuesta respecto del número de procedimientos de responsabilidad. Se tiene por colmado el dato cuantitativo  El documento del registro ha sido reservado. |
| 1. Número de sanciones administrativas emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023, en qué han consistido y a quiénes han sancionado. | **Resoluciones de Procedimientos Administrativos**  Ejercicio fiscal 2023: 0  Ejercicio fiscal 2022: 3  Ejercicio fiscal 2021: 0  Ejercicio fiscal 2020: 0  Ejercicio fiscal 2019: 0  Ejercicio fiscal 2018: 0 | Proporciona el dato cuantitativo de las resoluciones de procedimientos administrativos en general.  Se tienen por atendidos los ejercicios fiscales en ceros, 2018, 1019, 2020, 2021 y 2023.  Respecto del año 2022, en donde se reportan 3 resoluciones, al no poderse distinguir entre las resoluciones que sancionan y las que absuelven NO se tiene por colmado.  No hay pronunciamiento respecto de: En qué han consistido las sanciones y quiénes han sido sancionados. Sin embargo, atendiendo a los datos cuantitativos proporcionados se tiene por colmado, 2018, 1019, 2020, 2021 y 2023. |
| 1. Número de resoluciones que absolvieron o dejaron de imponer sanción a personas con motivo de procedimientos de investigación o responsabilidad administrativa emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023. |

Contrastado lo anterior, para llevar a cabo el análisis pormenorizado de cada punto, se establece la siguiente **metodología**, agrupando lo solicitado bajo los temas siguientes:

1. **Datos cuantitativos:**

**1.1** Número total de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018 al 2023.

**1.2** Número total de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018 al 2023.

**1.3** Número de sanciones administrativas emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023.

**1.4** Número de resoluciones que absolvieron o dejaron de imponer sanción a personas con motivo de procedimientos de investigación o responsabilidad administrativa emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023.

1. **Documento del registro:**
   1. Documento en el que se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018 al 2023.
   2. Documento en el que se lleva el registro de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2028 al 2023.
2. **Sanciones:**
   1. En qué han consistido las sanciones administrativas emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023.
   2. Quiénes ha sido sancionados por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2018 al 2023.

Conforme con lo anterior, se observa que el tema en común son datos en los **procedimientos de responsabilidad administrativa**, motivo por el cual, primeramente, se establecerá su marco legal, se analizará su naturaleza, la procedencia y, posteriormente, se determinará si se ha colmado o no con lo solicitado.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la entidad, se observa que:

**Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

**I. Autoridad investigadora:** A la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal, encargadas de la investigación de las faltas administrativas.

**II. Autoridad substanciadora:** A la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.

**III. Autoridad resolutora:** A la unidad de responsabilidades administrativas adscrita a la Secretaría de la Contraloría y a los órganos internos de control o al servidor público que éstos últimos asignen, así como la de las empresas de participación estatal y municipal, tratándose de faltas administrativas no graves.

En el supuesto de faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares lo será el Tribunal.

El artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría dispone expresamente que el Área de Responsabilidades de los órganos internos de control se considerarán como autoridad Substanciadora, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 10. Para efectos de las facultades que la Ley de Responsabilidades le confiere a la Secretaría, serán consideradas como autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, las unidades administrativas siguientes:

I. Autoridades Investigadoras:

a. Dirección de Investigación;

b. Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría, y

c. Área de Quejas de los órganos internos de control de las dependencias y organismos auxiliares.

Cuando los Órganos Internos de Control no cuenten con estructura, la persona Titular del Órgano Interno de Control tendrá la función de ser Autoridad Investigadora y no podrá asumir ninguna otra función.

II. Autoridades Substanciadoras:

a. Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas;

b. Dirección de Responsabilidades Administrativas;

c. Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría, y

d. Área de Responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y organismos Auxiliares.

La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.

III. Autoridades Resolutoras:

a. Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas;

b. Dirección de Responsabilidades Administrativas

c. Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría;

d. Titulares de los órganos internos de control de las dependencias y organismos auxiliares, y

e. Área de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y organismos auxiliares.

Conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se observa que:

***Artículo 95.*** *La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas podrá iniciar:*

***I.*** *De oficio.*

***II.*** *Por denuncia.*

***III.*** *Derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en su caso, de auditores externos.*

*Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras deberán garantizar, proteger y mantener el carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.*

***Artículo 116.*** *El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa.*

Es preciso señalar que, se atenderá a los dos tipos de faltas administrativas cometidas por servidores públicos: **las graves y no graves**; en éstas últimas, la imposición de la sanción le corresponde a los Órganos Internos de Control, por otro lado, respecto a las faltas administrativas graves, la imposición de la sanción le corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Bajo ese contexto, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de la Entidad, considera como faltas administrativas no graves, las siguientes:

***Artículo 50.*** *Incurre en* ***falta administrativa no grave****, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes:*

*I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos, a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere esta Ley.*

*II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley.*

*V. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables.*

*VI. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.*

*VII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. …*

*VIII. Actuar y ejecutar legalmente con la máxima diligencia, los planes, programas, presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados.*

*IX. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y responsabilidad o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas.*

*X. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas y servidores públicos con los que tenga relación con motivo de éste.*

*XI. Observar un trato respetuoso con sus subalternos.*

*XII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de esta Ley.*

*XIII. Cumplir con la entrega de índole administrativo del despacho y de toda aquella documentación inherente a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen.*

*XIV. Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los programas respectivos.*

*XV. Abstenerse de solicitar requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto adicional no previsto en la legislación aplicable, que tengan por objeto condicionar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económicas o negocios.*

*XVI. Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la Ley de la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables.*

*XVII. Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e información personal recomendada por las instancias competentes.*

*XVIII. Cumplir oportunamente con los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o cualquier de las Salas Auxiliares del mismo, así como pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, y*

*XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables.*

(Énfasis añadido)

Por su parte, el artículo 52 de la misma Ley precisa como faltas administrativas graves, las siguientes:

***Artículo 52.*** *Para efectos de la presente Ley, se consideran* ***faltas administrativas graves*** *de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:*

*I. El cohecho.*

*II. El peculado.*

*III. El desvío de recursos públicos.*

*IV. La utilización indebida de información.*

*V. El abuso de funciones.*

*VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.*

*VII. El actuar bajo conflicto de interés.*

*VIII. La contratación indebida.*

*IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.*

*X. El tráfico de influencias.*

*XI. El encubrimiento.*

*XII. El desacato.*

*XIII. La obstrucción de la Justicia.*

Además, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de la Entidad, **la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas es competencia de los órganos internos de control** para el caso de la existencia de faltas administrativas no graves, estos podrán substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad.

En resumen, atendiendo a las disposiciones legales previas, el proceso de posibles responsabilidades administrativas se divide en dos etapas a saber:

1. **Investigación:** Dicha etapa comienza, de oficio o por la presentación de una denuncia o queja ante los Órganos Internos de Control; por lo que, estos deberán de allegarse de la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, así como realizar visitas de verificación.

**1.1** Concluidas las diligencias de investigación, procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, con el fin de **determinar la existencia o inexistencia de actos de faltas administrativas graves o no graves** y así emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

**1.2** En el caso de no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción, y acreditar la presunta responsabilidad, se emitirá el **acuerdo de conclusión y archivo del expediente**, debidamente fundado y motivado.

**2. Proceso de Responsabilidad Administrativa:** Falta grave (ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México), falta no grave (ante el Órgano Interno de Control), dicho procedimiento se lleva conforme a lo siguiente:

1. Se admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
2. Se ordena el emplazamiento, para citar a audiencia, así como a las partes que deban concurrir;
3. Se lleva a cabo la audiencia inicial, en donde el presunto responsable rendirá su declaración y ofrecerá las pruebas conducentes, son llamados los terceros interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y entreguen pruebas.
4. Se admiten pruebas, se abre periodo de alegatos y posteriormente se cierra la instrucción.
5. Se emite resolución, la cual deberá ser notificada al servidor público, al denunciante para su conocimiento y al jefe inmediato superior para efectos de ejecución.

Aunado a lo anterior, la citada Ley dispone que:

**Artículo 105.** Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras podrán **abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad** administrativa previsto en la presente Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, en el supuesto que derivado de las investigaciones practicadas o de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, se advierta que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó.

II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron. La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo.

Ahora bien, por regla general los procedimientos de responsabilidades administrativas son documentos susceptibles de ser entregados en versión pública de conformidad con los parámetros expuestos con antelación, con excepción de **aquellos que se encuentren en trámite**, al actualizar el artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuyo contenido dispone a la literalidad lo siguiente:

**Artículo 140.** El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:

**VI.** Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, **incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes** o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;”

En ese sentido, se advierte que únicamente procede la entrega, en versión pública, cuando el procedimiento administrativo haya quedado firme, debiendo observar la restricción de la reserva que en términos del numeral 142 de la Ley de Transparencia local no podrá invocarse bajo los siguientes supuestos normativos:

“Artículo 142. Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos, calificada así por autoridad competente;

II. Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;

III. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y

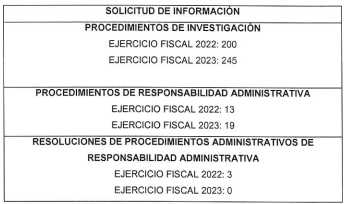
IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”

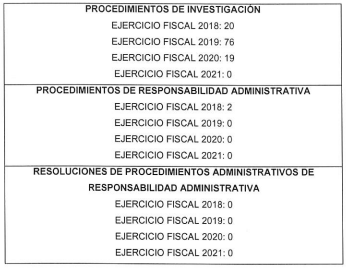
En función de lo planteado, resulta responsabilidad del sujeto obligado valorar el contenido de la información y en su caso advertir la posible actualización de causales de confidencialidad y/o reserva.

Expuesto el marco normativo en materia de responsabilidades administrativas procederemos al análisis de cada punto solicitado.

1. **De los datos cuantitativos.**

Al respecto, en el oficio de respuesta el **SUJETO OBLIGADO** expuso:





De los datos cuantitativos requeridos por la solicitante, relativos al **número de procedimientos de investigación** y al **número de procedimientos de responsabilidad**, se observa que el **SUJETO OBLIGADO** se ha pronunciado de los años solicitados: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023[[4]](#footnote-4) por lo que **se tienen por colmados esos datos cuantitativos**.

Siendo aplicable el criterio orientador 11/09 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que refiere lo siguiente.

**Criterio 11/09**

**La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada**. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación.

Ello es así, pues al haber existido un pronunciamiento por parte del **SUJETO OBLIGADO**, este Órgano Garante no está facultado para manifestarse sobre la veracidad de la información proporcionada, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de la Materia que permita que, vía recurso de revisión, se pronuncie al respecto. En consecuencia, se tiene al **SUJETO OBLIGADO** colmando lo solicitado, identificado como 1.1 y 1.2.

En cuanto a los puntos 1.3 y 1.4 se observa que, se proporciona el dato cuantitativo de las resoluciones de procedimientos administrativos, de los cuales, si bien no es posible distinguir el número de sanciones administrativas así como aquellas resoluciones en donde se absolvió, respecto de las anualidades 2018, 2019, 2020, 2021 y 2023 al 22 de junio al advertirse que se informa cero casos, se tiene por atendida (colmada) esta parte de la solicitud, sin embargo, respecto del ejercicio fiscal 2022 en donde señala 3 resoluciones, al no poderse identificar el número de sanciones o absoluciones, no se puede tener por colmado.

En ese contexto, se llega a la conclusión que la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO** respecto del año 2022 carece de certeza, congruencia y exhaustividad, toda vez que la **PARTE RECURRENTE** solicita números de sanciones administrativas y de resoluciones con absolución, a lo que el **SUJETO OBLIGADO** respondió de forma general sin distinguir entre lo solicitado, sirve de sustento a lo anterior, el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

“**Congruencia y exhaustividad.** Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, **la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado**; mientras que **la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados.** Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”

(Énfasis añadido)

Del citado criterio, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse al principio de congruencia, lo que implica que, exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, así entre lo solicitado y lo entregado debe guardar una relación lógica a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.

Aunado a lo anterior, este Órgano Garante debe actuar observando el principio de certeza conforme al artículo 9 fracción I de la Ley de la materia, es decir, otorgandoseguridad y certidumbre jurídica a los particulares, situación que, ante las imprecisiones de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, no se alcanza, dejando al solicitante en estado de incertidumbre.

En consecuencia, atendiendo al principio de máxima publicidad y con la finalidad de privilegiar el derecho de acceso a la información pública de **LA RECURRENTE,** el Pleno de este Instituto estima que, respecto de estos puntos solicitados, las razones o motivos de inconformidad hechos valer resultan **fundadas** y suficientes para **MODIFICAR** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** recaída a la citada solicitud de información, a efecto de que haga entrega de la documentación en donde consten:

1. Número de **sanciones administrativas** emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2022.
2. Número de **resoluciones que absolvieron** o dejaron de imponer sanción a personas con motivo de procedimientos de responsabilidad administrativa emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2022.
3. **Del documento del registro y 3. Sanciones** (en qué han consistido y a quiénes han sancionado)**.** Estos temas serán analizados en conjunto dada la cercanía de la información motivo de estudio.

Respecto del documento en el que se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa (2.1) y el documento del registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa (2.2) tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y del 1 de enero al 22 de junio de 2023, se observa que el **SUJETO OBLIGADO** ha reservado la información al considerar que se actualiza la hipótesis del artículo 140 fracción VI de la Ley de Transparencia local.

Por cuanto a **3.1** **en qué han consistido las sanciones y 3.2 a quiénes han sancionado** en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y del 1 de enero al 22 de junio de 2023, se observa que el **SUJETO OBLIGADO** ha sido **omiso en pronunciarse**, sin embargo, como se señaló en el cuadro de estudio, respecto de los años en donde se reportó en cero, se tiene por colmada esa parte de la solicitud, contrario a ello, en el caso del año 2022, los datos de la sanción y el nombre del sancionado se considera que son datos que pudieran formar parte de los datos que integran los documentos de registros de procedimientos de responsabilidad administrativa.

Referente a ello, no es ocioso señalar que fue realizado un requerimiento de información adicional a efecto de conocer los datos contenidos en los documentos del registro que fueron reservados, sin embargo, del desahogo del mismo, no se advierte información al respecto.

Ahora bien, al haberse reservado los documentos de registro, es importante señalar que, para realizar la reserva de la información, no basta con invocar alguna de las causales previstas en la Ley de transparencia local, sino que debe realizarse una valoración a través de lo que se conoce como ***“prueba de daño”,*** que consiste en exponer los argumentos y razones, basados en elementos objetivos o verificables, a partir de los cuales se derive que la divulgación de información, en particular, puede afectar, poner en riesgo o dañar el interés protegido[[5]](#footnote-5). Asimismo, ésta no debe basarse en meras especulaciones o suposiciones, sino en elementos objetivos que deban evaluar que existe un riego actual e inminente[[6]](#footnote-6).

Esto implica que la motivación, que acredite la correspondencia entre el supuesto de hecho y la hipótesis normativa señalando las razones, motivos o circunstancias es una parte del acuerdo y otra parte, distinta, es la que corresponde a la prueba de daño, la que debe aplicarse caso por caso, esto es, no se puede hacer una prueba de daño de un expediente completo, **sino de cada uno de los documentos que lo integran**.

Para aplicar la prueba de daño, se deberán de precisar las razones objetivas por las que la apertura genera una afectación, acreditando que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Por lo que entonces, el primer supuesto de la prueba de daño consiste en acreditar que la entrega de la información provoca tres aspectos concurrentes: 1) la contingencia o proximidad de un daño, un perjuicio o lesión que tiene existencia objetiva, que se puede manifestar, declarar o probar mediante cualquier género de demostración a partir de proporcionar datos necesarios para reconocer el daño, perjuicio o lesión que provocaría a un interés público o a la seguridad pública.

Identificado ese riesgo, se debe demostrar que el mismo supera el interés público general porque se difunda dicha información.

Y, por último, que la limitación es acorde con el principio de proporcionalidad, para ello, se sugiere emplear los tres juicios propuestos por la Corte Constitucional Colombiana[[7]](#footnote-7), siguiendo el principio de ponderación propuesto por el Tribunal Constitucional Alemán,[[8]](#footnote-8) el juicio de idoneidad, que la medida adoptada sea la idónea para el ejercicio del derecho; de necesidad, que sea necearía para que el derecho que prevalece se ejerza y el de estricta proporcionalidad esto es, que el derecho que prevalezca sea en la dimensión estrictamente proporcional al derecho que retrocede.

Es así que, al configurarse tales requisitos, se otorga certidumbre jurídica y se protege la esfera más íntima del derecho humano constitucional y convencionalmente reconocido.

En virtud de lo anterior, se desprende que los Acuerdos de Reserva deberán de cumplir los siguientes parámetros de forma y fondo:

* Número de folio de la solicitud.
* Referencia a la información solicitada.
* Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.
* Fundamento y motivación legal.
* Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la reserva de la información.

**Prueba de daño**

Riesgo real, demostrable e identificable (modo, tiempo y lugar).

Temporalidad de la reserva de la información.

Autoridades competentes.

Continuando con el estudio de la información entregada, analizaremos si la determinación del Comité de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** a través del cual, determina la reserva de la información, del documento(s) en el que se lleva el registro de procedimientos de investigación de responsabilidad administrativa y responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y del 1 de enero al 22 de junio de 2023, se apega a los parámetros en la Ley y Lineamientos de referencia para la reserva correspondiente:

|  | **Cumplió:** | **Contenido** |
| --- | --- | --- |
| **Número de folio de la solicitud** | **Sí** |  |
| **Referencia de la información solicitada** | **Si** |  |
| **Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada** | **No** |  |
| **Fundamento y Motivación Legal** | No, porque no hay motivación. |  |
| **Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva de la información** | **No** | No, al no haber congruencia entre lo fundamentado. |
| **Prueba de Daño** | | |
| **Riesgo Real, Demostrable e Identificable**  **(Modo, Tiempo y Lugar)** | **No** | Se encuentra en un documento aparte.  En la determinación del Comité solo se señala el artículo 129 de la Lay de Transparencia local: |
| **Temporalidad de la Reserva de la información.** | **Si** |  |
| **Autoridades competentes.** | **Sí** |  |

Analizada la prueba de daño, se advierte que:

* Si bien hace referencia a la información solicitada, lo cierto es que reserva de forma completa lo solicitado, sin identificar cada una de las partes que conforman la solicitud.
* No hay congruencia entre la propuesta de la prueba de daño presentada por el Servidor Público Habilitado y la determinación del Comité de Transparencia al ser incongruentes los fundamentos legales invocados.
* No hay motivación en la determinación del Comité de Transparencia, pues se limita a la transcripción de artículos con fracciones que no son aplicables al caso.

En ese sentido, no cumple con los parámetros solicitados en la legislación y lineamientos anunciados, por tanto, la información solicitada, podría ser entregada incluso en versión pública.

En el caso, no están solicitando los procedimientos, ni las investigaciones contenidas, sino **solo datos que por su propia naturaleza podrían actualizar hipótesis de confidencialidad.**

Atendiendo a lo analizado y considerando la naturaleza de la información solicitada se advierte que el motivo de inconformidad es parcialmente **fundado** y suficiente para **modificar** la respuesta entregada y ordenar al **SUJETO OBLIGADO** haga entrega de ser procedente en **versión pública** del documento o documentos en donde consten:

**C.** El registro de procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y del 1 de enero al 22 de junio de 2023.

**D.** Las sanciones emitidas por la contraloría municipal durante 2022 de procedimientos que hayan causado estado.

**E.** Acuerdo de clasificación como confidencial respecto a los nombres de las personas sancionadas durante 2022 de procedimientos que hayan causado estado.

Para las versiones públicas, se deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual, se apruebe la clasificación de información, en términos del artículo 49, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las particularidades de los datos confidenciales que se establecen en el apartado correspondiente de esta resolución.

Finalmente, respecto de lo identificado con el número 5 “*En caso de que se niegue a entregar la información solicitada, presentaré solicitud y entrega de la versión publica de cada uno de los expedientes con estatus o carácter de concluidos de los procedimientos de investigación y de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los años del 2018 a junio de 2023*” se advierte que dicho planteamiento se trata de una advertencia en donde se presume una solicitud de información posterior, lo cual, no constituye una solicitud de acceso a la información, por lo que se dejan a salvo los derechos de la **PARTE RECURRENTE**.

### d) Versión pública

Para el caso de que el o los documentos de los cuales se ordena su entrega contengan datos personales susceptibles de ser testados, deberán ser entregados en **versión pública**, pues el derecho de acceso a la información tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados sean protegidos y únicamente se den a conocer aquéllos que abonen a la rendición de cuentas y a la transparencia en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas. De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

**“Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

**IX.** **Datos personales:** La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;

**XX.** **Información clasificada:** Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;

**XXI.** **Información confidencial**: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;

**XLV. Versión pública:** Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.

**Artículo 51.** Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información **y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada.** Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.

**Artículo 52.** Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.” (Énfasis añadido)

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que se efectúe deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 22, párrafo primero, relacionado con el 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales se transcriben para mayor referencia:

**“Artículo 22.** Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

**Artículo 38.** Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, a través de controles y acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transferencia, acceso o cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan.**”**

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de la materia permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

Lo anterior es así, en virtud de que toda la información relativa a una persona física o jurídico colectiva que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial que debe ser protegida por **EL SUJETO OBLIGADO,** por lo que, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

La finalidad de la versión pública es salvaguardar la vida, integridad, seguridad, patrimonio y privacidad de las personas; de tal manera que, todo aquello que no tenga por objeto proteger lo anterior, es susceptible de ser entregado. En otras palabras, la protección de datos personales es una derivación del derecho a la intimidad.

Asimismo, es importante señalar que dicha clasificación se tiene que efectuar mediante la forma y formalidades que la ley de la materia impone; es decir, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado de su Comité de Transparencia, en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

**“Artículo 49.** Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:

**VIII.** Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;

**Artículo 132.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

**I.** Se reciba una solicitud de acceso a la información;

**II.** Se determine mediante resolución de autoridad competente; o

**III.** Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.**”**

**“Segundo. -** Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:

**XVIII.** **Versión pública:** El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.

**Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información**

**Cuarto.** Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

**Quinto.** La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.

**Sexto.** Se deroga.

**Séptimo.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

**I.** Se reciba una solicitud de acceso a la información;

**II.** Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o

**III.** Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

Los titulares de las áreas deberán revisar la información requerida al momento de la recepción de una solicitud de acceso, para verificar, conforme a su naturaleza, si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.

**Octavo.** Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba del daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

**Noveno.** En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.

**Décimo.** Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de la Ley General de Archivo, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable.

En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.

**Décimo primero.** En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.**”**

Consecuentemente, se destaca que la versión pública que elabore **EL SUJETO OBLIGADO** debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley, por lo que para tal efecto emitirá el **Acuerdo del Comité de Transparencia** en términos de los artículos 122 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con el cual sustentará la clasificación de datos y con ello la "versión pública" de los documentos materia de la solicitud, ya que de no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no se señalan las razones por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- lo cual deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones, se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

Es importante señalar que, para el caso en concreto, se deben tomar en consideración los siguientes criterios respecto a la información que debe ser, o no, clasificada como confidencial:

**Nombre.**

De acuerdo con el **Código Civil del Estado de México** establece:

TITULO CUARTO

Del Nombre de las Personas Concepto del nombre de las personas

Artículo 2.13.- El nombre designa e individualiza a una persona. Composición del nombre de las personas físicas

Artículo 2.14. **El nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre**, en el orden que, de común acuerdo determinen. En el caso de que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, el apellido paterno aparecerá en primer lugar y el apellido materno en segundo lugar.

El orden de los apellidos acordado entre padre y madre se considerará preferentemente para los demás hijos e hijas del mismo vínculo.

Cuando solo lo reconozca uno de ellos se formará con los apellidos de este, en el mismo orden, con las salvedades que establece el Libro Tercero de este Código.

En ese sentido, de acuerdo con la referida Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios en su artículo 4, el nombre es información relativa a una persona que esencialmente identifica a alguien, siendo un dato personal por excelencia, el cual, en el caso de los servidores públicos pierde dicho carácter ante la rendición de cuentas y las obligaciones propias de la Ley de Transparencia, sin embargo, dicho dato personal en el caso de los procedimientos de responsabilidad administrativa, para efecto de la entrega de información, también se debe observar la presunción de inocencia, por lo que en el caso, para el presente asunto, por lo que respecta al **documento de registro ordenado** se deberá observar lo siguiente:

* **El nombre de los denunciantes** **y testigos** (sean o no servidores públicos) deberán ser testados.
* **El nombre de personas absueltas** debe ser testado.
* **El nombre de los denunciados** debe ser testado, salvo, dos **excepciones** en las cuales, deberán dejarse a la vista:
* Aquellos casos en donde se actualice algún **supuesto del artículo 142** de la Ley de Transparencia local:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos, calificada así por autoridad competente;

II. Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;

III. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y

IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”

* El **nombre de los sancionados** en asuntos concluidos que culminaron en sanciones **por faltas administrativas graves**.

**Bajo esa misma lógica, deberá ser testado el cargo, área de adscripción y cualquier dato que haga identificable a las personas servidores públicos involucradas.**

### f) Conclusión

Al haberse evidenciado que la información entregada no está completa y que el acuerdo de reserva emitido por el **SUJETO OBLIGADO** no satisface los parámetros legales y normativos atinentes, se califica como **fundado** el motivo de inconformidad y en consecuencia se ordena la entrega de la información conforme al presente considerando.

Así, con fundamento en lo establecido en los artículos 5, párrafo trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y en los artículos 2, fracción II, 9, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

# RESUELVE

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **SUJETO OBLIGADO** en la solicitud de información 00066/TMASCALC/IP/2023, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **LA PARTE RECURRENTE** en el Recurso de Revisión **04197/INFOEM/IP/RR/2023**,en términos del considerando **SEGUNDO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO**, a efecto de que, entregue a través del SAIMEX, en su caso en versión pública, los documentos que den cuenta de lo siguiente:

1. Número de sanciones administrativas emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2022.
2. Número de resoluciones que absolvieron o dejaron de imponer sanción a personas con motivo de procedimientos de responsabilidad administrativa emitidas por la contraloría municipal de Temascalcingo del año 2022.
3. El **registro de procedimientos** **de investigación y de responsabilidad** administrativa tramitados en la contraloría municipal de Temascalcingo de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y del 1 de enero al 22 de junio de 2023.
4. Las **sanciones** emitidas por la contraloría municipal durante 2022 de procedimientos que hayan causado estado.
5. Acuerdo de clasificación como confidencial respecto a los nombres de las personas sancionadas por la contraloría municipal durante 2022 de procedimientos que hayan causado estado.

Para las versiones públicas, se deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual, se apruebe la clasificación de información, en términos del artículo 49, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO.** Notifíquese **vía SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de **diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de **tres días hábiles** siguientes, sobre el cumplimiento dado a la presente. Asimismo, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** Notifíquese a **LA PARTE RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**QUINTO**. Hágase del conocimiento a **LA PARTE RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **SUJETO OBLIGADO** podrá solicitar una ampliación de plazo de manera fundada y motivada, para el cumplimiento de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA EMITIENDO VOTO PARTICULAR SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/ESS

1. Se advierte que si bien el recurso fue presentado a través del SAIMEX el veinte de julio, lo cierto es que al corresponder a un día inhábil se tiene por presentada al próximo hábil siguiente. [↑](#footnote-ref-1)
2. *“***Artículo 13**. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.” [↑](#footnote-ref-2)
3. “**Artículo 181**. (…) Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiarlos hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.” [↑](#footnote-ref-3)
4. Entendiéndose al 22 de junio de 2023, por ser la fecha de presentación de la solicitud. [↑](#footnote-ref-4)
5. Artículos 129 y 134, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en relación con los diversos 104 y 108, último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sergio López Ayllón y Alejandro Posadas. “Las pruebas de Daño e Interés Público en materia de acceso a la información. Una perspectiva comparada” en Derecho comparada de la Información, enero-junio de 2007. [↑](#footnote-ref-6)
7. “En las sentencias C-093 de 2001 y C-671 de 2001, se explicó el alcance de este tipo de escrutinio, denominado test integrado de igualdad: "[a] fin de determinar si el trato discriminatorio vulnera el derecho fundamental a la igualdad, la Corte ha elaborado un modelo de análisis que integra el juicio de proporcionalidad y el test de igualdad. Lo que en este modelo se hace, básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test o juicio de proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia estadounidense. Así, se emplean las etapas metodológicas del test europeo, que comprende las siguientes fases de análisis: (i) se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (ii) se analiza si el trato diferente es o no necesario o indispensable; y (iii) se realiza un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencia. De otra parte, se toman los distintos niveles de intensidad en la aplicación de los escrutinios o tests de igualdad. Dichos niveles pueden variar entre (i) estricto, en el cual el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso; (ii) intermedio, es aquel en el cual el fin debe ser importante constitucionalmente y el medio debe ser altamente conducente para lograr el fin propuesto; y (iii) flexible o de mera razonabilidad, es decir que es suficiente con que la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento. Lo anterior debe tener aplicación, según el carácter de la disposición legislativa o la medida administrativa atacada". El test integrado fue aplicado en un caso de discriminación por VIH en la sentencia T-376 de 2013.” Citado en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gonzales Lluy y otros contra Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 01 de septiembre de 2015. Párr. 256.   [↑](#footnote-ref-7)
8. Tribunal Constitucional Alemán. Resolución sobre los soldados son asesinos, de 10 de octubre de 1995 (BVerfGE 93, 266). En ALÁEZ CORRAL, Benito y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Leonardo. Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal Alemán en las encrucijadas del cambio de milenio. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y boletín oficial del Estado, Madrid, 2008. Pp. 1045-1096. [↑](#footnote-ref-8)